

Persecución de otros bienes en ejecutivo con garantía real

Un tema que ha venido generando controversia en los estrados judiciales tiene que ver con la posibilidad de definir si en un proceso ejecutivo iniciado para hacer efectiva exclusivamente la garantía real pueden perseguirse los demás bienes de propiedad del deudor, cuando rematado el bien que soporta el gravamen no se extingue la obligación con el producto del remate, o cuando prospera una oposición al secuestro del mismo.

De entrada, hay que decir que, si se remata el bien dado en garantía y con el producto de la subasta no se extingue el crédito, de acuerdo con lo previsto en el inciso 6° del numeral 6° del artículo 468 del Código General del Proceso (CGP), el acreedor podrá perseguir en el mismo proceso y sin necesidad de tener que prestar caución los demás bienes, siempre que ese ejecutado tenga además la condición de deudor. En efecto, dice la disposición que

“Cuando a pesar del remate o de la adjudicación del bien la obligación no se extinga, el acreedor podrá perseguir otros bienes del ejecutado, sin necesidad de prestar caución, siempre y cuando éste sea el deudor de la obligación”.

El asunto se ofrece un poco confuso al examinar el numeral 3° del artículo 596 del CGP, que regula la situación cuando no pueda obtenerse el secuestro del bien dado en garantía porque se formula o prospera la objeción planteada por un poseedor, pues, lamentablemente, esta disposición no reprodujo el inciso final del párrafo 3° del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el cual sí preveía que, de levantarse o no lograrse el secuestro del bien dado en garantía, el ejecutante podía perseguir bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda y serían admisibles tercerías de acreedores sin garantía real. El CGP solo previó que, si no se concreta el secuestro del bien dado en garantía o se levanta, si se trata de mueble, quedará



RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Director del Departamento de
Derecho Procesal de la Universidad
Externado de Colombia

“... si el bien dado en garantía ha desaparecido (...), el ejecutante podrá perseguir otros bienes del ejecutado allí mismo y no en proceso separado...”.

insubsistente el embargo, o este se levantará, si se trata de inmueble, a menos que en este último evento el ejecutante pretenda perseguir los derechos inscritos del ejecutado en ese bien, pero, se repite, no se refirió a la posibilidad de

perseguir otros bienes del ejecutado.

A pesar de que no se reprodujo la disposición que preveía que al no poderse secuestrar el bien dado en garantía el ejecutante podría perseguir en el mismo proceso otros bienes, la solución tiene que seguir siendo la misma en vigencia del CGP. En efecto, esa omisión no cambia la decisión de que el ejecutante pueda perseguir más bienes en ese mismo proceso, porque habiéndose unificado en un solo trámite el ejecutivo no tiene sentido que ante la imposibilidad de secuestrar el bien dado en garantía se abandone esa ejecución con garantía real para obligar a ese acreedor a que tenga que iniciar un nuevo proceso ejecutivo aparentemente quirografario, el cual necesariamente sería igual a aquel donde no pudo secuestrar el bien dado en garantía.

Adicionalmente, si, como lo hemos recordado, cuando desaparece el bien dado en garantía por haberse rematado sin que lo recaudado alcance para cancelar el crédito, la ley

permite al acreedor perseguir otros bienes del ejecutado sin necesidad de prestar caución, “siempre y cuando éste sea el deudor de la obligación”, ese mismo remedio debe aplicarse cuando el bien gravado no puede perseguirse porque no se concretó su secuestro o este se levantó. Ese vacío que se creó al no haber reproducido el párrafo 3° del artículo 686 del CPC, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del CGP, debe llenarse con lo previsto en el inciso 6° del numeral 6° del artículo 468 del CGP, por tratarse de un “caso análogo”.

En consecuencia, en ambos escenarios, si el bien dado en garantía ha desaparecido, ya sea porque se remató y no se extinguió el crédito o porque no pudo concretarse o sostenerse el secuestro del mismo, el ejecutante podrá perseguir otros bienes del ejecutado allí mismo y no en proceso separado, siempre que este, además de propietario de la cosa que se remató también, sea deudor, independientemente de que, por un olvido o por cualquiera otra causa, no se hubiese reproducido el inciso final del párrafo 3° del derogado artículo 686 del CPC, que hoy se echa de menos.

Corrupción y cotidianidad

Con la expedición del Decreto 1333 del 2018, que regula algunas situaciones

relacionadas con las incapacidades y, más allá de los alcances prácticos de su contenido, se pone en evidencia el afán de evitar desde lo normativo conductas de abuso del derecho que en la línea de lo correcto no tendrían por qué ser motivo de regulación específica.

Tener que decir que las EPS realicen la rehabilitación del paciente en el tiempo debido para evitar “incapacidades prolongadas” o que el enfermo obedezca el tratamiento o no sea renuente a acudir a los exámenes para determinar la pérdida de la capacidad laboral o que no pretenda pagos simultáneos de la EPS y de la ARL o que no utilice tiempos de incapacidad en actividades que impiden su recuperación describen una narrativa mucho más profunda que el sano propósito normativo.

Esta muestra de frecuentes conductas contrarias a lo que sentimos que no debería ser constituye apenas un síntoma del virus que afecta el día a día de nuestra interacción, más allá de temas como los que



JULIO CÉSAR CARRILLO GUARÍN

Asesor en Derecho Laboral,
Seguridad Social y
Civilidad Empresarial
carrilloasesorias@carrillocia.com.co

aparezcan en los puntos materia de la consulta “anticorrupción” y mucho más allá de pensar que solo la norma y la coercibilidad son la solución al problema.

Se dirá entonces que esto de la corrupción es un asunto superado que ya “pasó de moda” y que nada tiene que ver con la cotidianidad laboral, pues sentimos de buena fe que es un tema de “los otros” y no del “nosotros”, mientras no cometamos fraudes o robos o agresión física o daño en cosa ajena o cualquier conducta que esté dentro del espectro laboral disciplinario o penal.

Sin embargo, olvidamos que el concepto de corrupción no siempre es equivalente a la

falta tipificable como delito o a la vulneración comprobada del régimen de obligaciones y prohibiciones.

Una manzana se corrompe cuando pierde el principio activo que le da su razón de ser como alimento, en la medida en que dejará de ser manzana para ser otra cosa.

En este sentido y en la perspectiva de lo laboral, también podría haber corrupción cuando ocurre pérdida de sentido o descomposición en la actitud respecto de lo que le da razón de ser a nuestra presencia en el trabajo, así no haya delito o falta disciplinaria.

Pensamos que, ante la descomposición institucional, la corrupción es una deficiencia del Estado y corremos el riesgo de asumir en la cotidianidad conductas intolerantes, manipuladoras o sin compromiso que no entran en el ámbito de lo penal o de lo disciplinario, pero significan pequeñas dosis de pérdida de sentido.

Y entonces el trabajo intencionalmente deficiente, las astucias formales para no prestar el servicio, la utilización del mando para privilegiar egos y soberbias, la manipulación de los niveles directivos empresariales o sindicales para el logro personal a espaldas del interés colectivo,

la discriminación por razón de género, el olvido del bien interno que da razón de ser al vínculo, la ingratitud con la oportunidad que se concede, la utilización sin afecto de los instrumentos y equipos, la no aceptación de los errores, el maltrato imperceptible, pero doloroso y tantas otras indiferencias, pueden terminar siendo descomposiciones que contaminan nuestro diario vivir de una peligrosa ausencia de valores y nos lleva, sin darnos cuenta, a engrosar el ejército de “pequeños” corruptos, como si la descomposición por “pequeñeces” no fuera socialmente tan grave como la llamada “gran corrupción”.

En suma, podemos ser corruptos cuando perdemos nuestro norte axiológico en términos de humanidad, cuando olvidamos lo esencial de nuestra función y dejamos de lado elementos quizás sencillos, pero fundamentales para generar en los entornos de trabajo verdadero espíritu de cooperación que invite a la comunidad a erradicar el egoísmo y privilegiar el afecto cívico por lo que a todos interesa.

Mientras tanto, corremos el riesgo de quedar esclavos de las maravillas de la inteligencia artificial y de la robótica, superados por la precisión del dato, ante el estigma lacerante

de ser parte de una comunidad de personas individualmente inteligentes y colectivamente torpes.

Es cierto, no somos perfectos. Pero la verdad es que no podemos disculparnos siempre con la imperfección y nunca podremos decir que se hace tarde para iniciar procesos de cambio de actitudes, remover nuestro desencanto y, desde lo más profundo de nosotros mismos, desde ese lugar de nuestro yo donde nos percibimos como seres buenos, promover organizaciones inteligentes... seres humanos en paz que, aunque no estamos exentos de fallar, siempre deseamos acertar.

Bien lo hacen las empresas que crean áreas de responsabilidad social o de cultura de inteligencia emocional... pero falta mucho. Las normas que se expiden para evitar los abusos, que no son otra cosa que la pérdida de sentido de nuestro deber de vivir con y para el otro, no son suficientes. Por ello, en la era de la robótica, esta clase de intervención cualitativa de la cotidianidad laboral es un factor diferencial indispensable para conectarse con las nuevas perspectivas de lo jurídico en tiempos de una laboralidad compleja.

Hagamos todos la gran consulta en nuestro interior y votemos por el Sí.

Ámbito Jurídico

AÑO XX - N° 500 - 8 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018

FUNDADOR: Tito Livio Caldas (1922-2016)

CONSEJO DE FUNDADORES:
Alberto Silva y Miguel E. Caldas

CONSEJO EDITORIAL:
Gonzalo Sanín Posada
Rubén Darío Lizarralde
Felipe Quintero
Andrés Caldas Rico

GERENTE GENERAL/
José Antonio Correa Díaz

DIRECTORA EDITORIAL: Martha Penen
EDITORES: Pedro Antonio Molina Sierra /
José Wilmar Patiño Ballesteros

REDACTORES/ Sara M. Cruz / Carmen Gutiérrez /
Catalina Albormoz / Juan Camilo Rivadeneira /
Claudia Romero / Leidy Johanna Giraldo

DISEÑO GRÁFICO/ Lady J. Medina M.

WEBMASTER/ Juan David Rojas

CORRECCIÓN/ Carlos Orlando González J. / ASISTENTE ADMINISTRATIVA/ Blanca Cano Quiroga
PUBLICIDAD Coordinadora nacional de ventas. Melissa Barón Espitia / melissa.baron@legis.com.co / 3168305549.
SEDE EDITORIAL Avenida calle 26 N° 82-70 Bogotá, D. C. • Conmutador: 425 5255 Ext. 1530
• Fax: 425 5317 • SUSCRIPCIONES 425 5200 • 018000-912101 • PREPrensa DIGITAL E IMPRESIÓN
Quad Graphics Colombia S.A. • Una publicación de LEGIS EDITORES S. A. Bogotá - Colombia

IMPORTANTE. Las opiniones de colaboradores y columnistas, como las expresadas en cualquier texto firmado, solo comprometen a sus autores. Este periódico respetará siempre, de manera escrupulosa, el derecho a las rectificaciones, lo mismo que el derecho a contradecir, aclarar o complementar opiniones o noticias publicadas en sus páginas.
ISSN 0123 - 465X • Prohibida la reproducción total o parcial bajo cualquier forma • © 2018 Legis Editores S. A.
Página web: www.ambitojuridico.com • Correo electrónico: ajuridico@legis.com.co • Twitter: @ambitojuridico
• Facebook: /ambitojuridico • Youtube: /ambitojuridicolegis • LinkedIn: /company/ambito-juridico/